



Trabajo Fin de Grado

Prohibiciones de contratar con el Sector Público y novedades comunitarias en la materia

Prohibitions on contracting with the Public Sector and community updates in this matter

Autor/es

Ivan Martínez Rodríguez

Director/es

José María Gimeno Feliu

Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza

Año 2019

INDICE

I. LISTADO DE ABREVIATURAS.....	4
II. INTRODUCCIÓN.....	5
III. INFLUENCIA COMUNITARIA Y PRECEDENTES NORMATIVOS.....	6
IV. OBJETIVOS PRETENDIDOS POR LA ARMONIZACIÓN	9
1. PRETEXTO DE LAS DIRECTIVAS 2014/23/UE Y 2014/24/UE	9
2. NOVEDADES PRETENDIDAS EN LA TRASPOSICIÓN.....	10
V. PROHIBICIONES DE CONTRATAR EN EL MARCO NACIONAL	13
1. CAUSAS DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .	13
2. APRECIACIÓN DE PROHIBICIONES DE CONTRATAR Y EFECTOS DESPLEGADOS	22
VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUTOCORRECCIÓN EN ESPAÑA.....	27
VII. CONCLUSIÓN	29
VIII.BIBLIOGRAFÍA	30
IX. ANEXO I	33
X. ANEXO II.....	34
XI. ANEXO III.....	36

I. LISTADO DE ABREVIATURAS

CE	Constitución Española
LCSP	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
LGS	Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
LGT	Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
LDC	Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
Ley Concursal	Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
LO	Ley Orgánica
RDL 3/2011	Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
RGLCAP	Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
CCAA	Comunidades Autónomas
BOE	Boletín Oficial del Estado
UE	Unión Europea
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
CP	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ss.	Siguientes
pp.	Páginas
Rec.	Recurso

II. INTRODUCCIÓN

La contratación pública, como medio del que se sirve el sector público para cumplir con las funciones de satisfacción de los intereses colectivos, adquiere una significación notable en el desarrollo social de todo Estado moderno. En base a la mencionada importancia que reviste esta actividad, por la cual el sector público adjudica a un licitador el cumplimiento de un contrato que coadyuve a los entes del sector público en el ejercicio de sus funciones, el legislador ha considerado oportuno servir a los poderes adjudicadores de instrumentos que protejan al procedimiento de contratación pública de actitudes que vicien la honorabilidad y pulcritud del sector público. Por ende, en relación con lo expuesto, se hace preceptivo analizar las prohibiciones de contratar como una de las herramientas más significativas de las que dispone el sector público para proteger su integridad.

No obstante, la integración de España en una comunidad supranacional de derecho como es la Unión Europea, tendente a la regulación de toda disciplina relacionada con el orden público, ha propiciado la armonización europea de las prohibiciones de contratar, ya desde el momento en que se advirtieron los peligros inmanentes a la contratación pública, a través de sendas Directivas de las cuales sus últimos paradigmas han sido la Directiva 2014/23/UE y la Directiva 2014/24/UE. Esta regulación europea de la materia ha promovido su asunción por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, mediante la trasposición realizada por los respectivos legisladores nacionales con las particularidades propias de la actividad legisladora de cada uno de ellos.

Se advierte entonces que el propósito de la presente memoria radica en evaluar la cota de consecución de los objetivos de protección del sector público, a través de las prohibiciones de contratar, con la aplicación de esta normativa por los organismos europeos, así como el grado de asunción de tales objetivos por los Estados miembros a través de la experiencia española fundada sobre la nueva LCSP. Con tal interés se pretende estudiar de manera transversal, primero desde el ámbito europeo y con posterioridad desde el ámbito nacional, la regulación de estas causas de exclusión en los procedimientos de contratación públicos para, en última instancia, contrastar el grado de consonancia existente entre sendas regulaciones, nacional e internacional, cosechado tras la trasposición española de la materia.

III. INFLUENCIA COMUNITARIA Y PRECEDENTES NORMATIVOS

Las prohibiciones de contratar de los licitadores o contratistas con el sector público, si bien carecen de definición legal que delimite su conceptualización, pueden considerarse, y como tal se tratarán en la presente memoria, como circunstancias propias del contratista, persona física o jurídica, que lo incapacitan para convertirse en adjudicatario de un contrato público de los regulados en la LCSP.

Dichas prohibiciones surgen en el seno de un marco europeo de competitividad y libertad de concurrencia, tal y como propugnan los principios tradicionales de contratación de los entes públicos¹, para limitarlo y coartarlo. La motivación que llevó a la UE a imponer una suerte de obstrucción a la libre concurrencia de los licitadores en el procedimiento de contratación pública radica en dos motivos principales:

- i. El intento de coartar los problemas endémicos que esconde la actividad de contratación pública como son la corrupción política y administrativa, así como la financiación ilegal de partidos políticos.
- ii. Imponer sobre los licitadores unos criterios de selección, que garanticen la idoneidad moral del licitador, para asumir las obligaciones derivadas del contrato como complemento a los criterios de selección puramente económicos que restringen al órgano adjudicador a elegir al contratista que presente mejor relación calidad-precio en su oferta.

Por ello, conviene fijar el punto de partida del presente estudio en la evolución legislativa en materia de prohibiciones de contratar en el marco comunitario, para posteriormente interpretar con mayor rigor la adaptación de esta figura en el ámbito nacional a través de la trasposición del legislador español.

En este sentido, se diferencian cuatro fases reguladoras en el Derecho comunitario que tratan de perfeccionar la regulación de la contratación pública, bajo la modalidad normativa de Directivas, con las consecuencias de trasposición estatal que derivan de su aplicabilidad sobre los Estados miembros.

La primera generación de Directivas europeas en materia de contratación pública se compone de la Directiva 71/305/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, y la Directiva 77/62/CEE, sobre

¹ Véase los artículos 49 y 56 del TFUE en donde se regulan los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, respectivamente.

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, que no aportan ningún aspecto significativo a la regulación de las prohibiciones de contratar de los licitadores, motivado por los escasos incidentes de corrupción constatados por la Comunidad Económica Europea hasta el momento en los procedimientos de contratación pública.

Por su parte, la legislación española fue regulando progresivamente esta materia desde antes, incluso, de su incorporación a la Comunidad Económica Europea como así lo demuestra la Ley de Contratos del Estado de 1968 que, si bien destaca por su sobriedad en la redacción de las causas de prohibición de contratar, ya contemplaba, en su artículo 9, diez prohibiciones de las cuales alguna todavía sigue vigente.

Mínima es la corrección que introduce la todavía Comunidad Económica Europea durante la década de los ochenta y los noventa a través de las modificaciones realizadas sobre las Directivas mencionadas mediante la Directiva 88/292/CEE, relativa a los contratos de suministro, y la Directiva 89/440/CEE, referida a los contratos de obra, que posteriormente fueron sustituidas por las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE respectivamente. Fue con el artículo 24 de esta última Directiva y con la aprobación de la Directiva 92/50/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, cuando se apreció la primera referencia europea a la conveniencia de establecer reglas comunes para la limitación de la participación en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, a través de un articulado muy sucinto de supuestos en los que, la comunidad, entendía que se estaba viciando el procedimiento de contratación pública en beneficio de unos intereses ajenos a aquellos para los que se había creado.

Con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1985, se inicia la obligación para este Estado miembro de integrar la normativa europea en su ordenamiento jurídico y, con esa finalidad y la de adicionar nuevas figuras al articulado de prohibiciones del que ya disponía en su normativa anterior, actúa al elaborar la Ley de Contratos del Estado de 1985. Tras la reforma de dicha Ley, a través de Real Decreto Legislativo, el legislador español se dispuso a trasponer las Directivas de los años noventa mediante la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, para conseguir una redacción más detallada de las prohibiciones de contratar que operaban como causas de exclusión del procedimiento de contratación pública para los licitadores.

No obstante, estas previsiones fueron sobradamente superadas con las Directivas de tercera generación entre las que destaca la Directiva 2004/18, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, al introducir cambios relevantes en la regulación de las primeras prohibiciones de contratar en sus artículos 43 a 45. Consciente el legislador comunitario, ya a principios del nuevo milenio, de la problemática encubierta por la contratación pública, como así lo expresa en los Considerandos de la propia Directiva mencionada, comienza a disgregar las prohibiciones de contratar basadas en conductas que requieren condena mediante sentencia firme de aquellas otras que se dejan a la libre voluntad del legislador nacional atendiendo a la regulación interna del Estado competente.

En clave nacional, la coronación de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas del año 1995 llegó con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que refundió en una sola norma toda la normativa en materia de contratos que hasta el momento se encontraba dispersa. Dicha Ley sería modificada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y posteriormente por el RDL 3/2011 con la intención de adaptar la normativa española a la novedosa Directiva 2004/18 que introdujo cambios relevantes, de fondo y forma, a la hora de regular las prohibiciones de contratar.

Sin embargo, los avances mencionados adquirieron mayor significación tras la aprobación de la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y el Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. Concretamente estas Directivas son las que suscitan la regulación, por parte del legislador español, de la LCSP que es objeto de análisis en la presente memoria como se verá más adelante.

Por todo ello, al redundar la UE en el interés de defender la competitividad del procedimiento de licitación², pero a su vez defender la exclusión de la participación en este tipo de procedimientos a los licitadores que incurren en los supuestos restrictivos y tasados, se observa una dicotomía interpretativa en el seno de la normativa comunitaria para con el procedimiento de contratación pública. No obstante, esta dicotomía queda justificada y resuelta siempre y cuando la restricción interpuesta a los licitadores al

² Véase STJUE SoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, apartado 37.

acceso a este procedimiento quede supeditada a la defensa del interés general y al cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad, como así parecen cumplir las prohibiciones de contratar en la LCSP promulgadas.

En definitiva, se puede advertir que la legislación española se ha ido adaptando progresivamente a esta normativa comunitaria, por medio de la sucesión de reformas legislativas en esta materia, con la intención de equiparar las condiciones de contratación pública españolas, entre las que se encuentran las prohibiciones de contratar, a las facilitadas por la normativa europea.

IV. OBJETIVOS PRETENDIDOS POR LA ARMONIZACIÓN

1. Pretexto de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE

Con esta cuarta generación de Directivas, la UE pretende pulir la armonización en materia de contratación pública y con tal propósito el legislador comunitario trabajó para que los Estados miembros adoptaran, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, los avances introducidos en sendas Directivas con la mayor brevedad posible, dotando a los legisladores nacionales de un plazo de trasposición recomendado que concluía el 18 de abril de 2016.

Este periodo coincidió con una etapa de exigua estabilidad política en España, provocada por la ausencia de gobierno para la XI legislatura de la democracia tras las elecciones del 21 de diciembre de 2015, circunstancia que maniató al legislador español para cumplir con las obligaciones de trasposición que marcaba la UE. Este hecho ha motivado la adopción extemporánea de la normativa³ y de las novedades en materia de prohibiciones de contratar que en estas Directivas se recogen.

Con el objeto de tratar con mayor rigor la intención de regular las prohibiciones de contratar del legislador comunitario recogidas en las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, se acude a los Considerandos de sendas Directivas en los que se observa como ambas comparten los siguientes objetivos:

- i. No adjudicar contratos públicos a operadores económicos que hayan participado en una organización delictiva o hayan sido declarados culpables de los actos delictivos mencionados

³ Circunstancia que motivó que la Comisión Europea demandara al Reino de España y le propusiera para sanción pecuniaria, que finalmente pagó por importe de 61.964,32 euros, tal y como recoge en el Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2018 (Asunto C-164/18).

- ii. Sancionar con la exclusión obligatoria de cualquier proceso de contratación pública a los operadores económicos que incurran en impagos de impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social
- iii. Dotar de potestad a los poderes adjudicadores de excluir, de forma facultativa, a los operadores económicos que hayan dado muestras de falta de fiabilidad para el cumplimiento del cometido del contrato público por la comisión de infracciones en materia medioambiental, profesional o administrativa, siempre respetando el principio de proporcionalidad.

Así pues, en la medida en que los supuestos que operan como prohibiciones de contratar para la regulación europea y española sean equiparables, podrá concluirse con que el legislador español opera en consonancia con los objetivos generales que el legislador europeo defiende en los mencionados Considerandos, probando con ello que la tarea de armonización europea, al menos en la materia concreta de prohibiciones de contratar, propicia el alineamiento en este campo del Derecho que ha despertado relevantes desavenencias tradicionalmente.

2. Novedades pretendidas en la trasposición

En la medida en la que el legislador comunitario pretende alcanzar los objetivos mencionados, incluye en los articulados de las respectivas Directivas dos novedades en la regulación de la contratación pública con respecto a la normativa anteriormente vigente⁴, ahora derogada con la entrada en vigor de la LCSP, que pretende alcanzar a través de las prohibiciones de contratar.

Por un lado, tanto el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE como el artículo 35 de la Directiva 2014/23/UE actúan como puente de trasposición de una de los avances más significativos en materia de prohibiciones de contratar como es la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de intereses en el seno de los procedimientos de contratación pública. Lo que pretende la Unión Europea, mediante su inclusión en los ordenamientos nacionales, es imponer la obligación a los poderes adjudicadores de adoptar las medidas oportunas para combatir el fraude, el favoritismo y la corrupción, así como de prevenir, detectar y solucionar efectivamente los conflictos de intereses que surgen en este tipo de procedimientos de contratación pública a fin de evitar cualquier

⁴ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público.

distorsión de la competencia y garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación y la igualdad de trato de todos los candidatos y licitadores.

En este sentido, el legislador español, que ya se encontraba a la vanguardia en medidas para evitar y solucionar los conflictos de intereses, condicionado sin duda por la notable trayectoria de casos de corrupción política en España⁵, no ha tenido que introducir cambios significativos en esta materia respecto de la regulación que venía recogida en los apartados g) y h) del artículo 61 del RDL 3/2011, pues mantiene el tenor literal del precepto y se limita a actualizar la normativa en la que se fundan los conflictos de intereses respecto de la Administración General del Estado y las CCAA⁶.

No obstante, mayor atención dedica el legislador español a sancionar con la prohibición de contratar a aquellos licitadores incursos en impagos con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, como más adelante se verá, al reforzar los casos de prohibición surgidos de actos de fraude y corrupción para con estas instituciones de los que el propio licitador podrá desentenderse exclusivamente prestando declaración responsable ante el órgano adjudicador en el que concurra.

Por otro lado, el legislador comunitario ambiciona la perfección de las reglas de aplicación de las prohibiciones de contratar, en favor de la promoción de la competitividad en los procedimientos de adjudicación, al introducir las medidas de autocorrección⁷ que permiten a los operadores económicos incursos en determinadas prohibiciones de contratar superar la causa de exclusión y conseguir que el órgano adjudicador restituya su confianza en ellos, permitiéndoles participar en el proceso de adjudicación del que originalmente se encontraban excluidos. Con ello pretende que los Estados miembros moderen la aplicación de las prohibiciones de contratar siempre y cuando los operadores económicos adopten los mecanismos correspondientes para corregir la situación de prohibición en la que se encuentren, y lo hagan eficazmente para evitar que ésta se repita.

⁵ Como así recoge el Informe Global sobre corrupción en España del año 2008 a cargo de Transparency International España.

⁶ La normativa vigente es la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, que viene a sustituir a la recogida en el RDL 3/2011 que era la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

⁷ Medidas reguladas en los artículos 57.6 de la Directiva 2014/24/UE y 38.9 de la Directiva 2014/23/UE.

No obstante, cabe advertir antes de continuar que las medidas autocorrectoras, que sin duda obran a favor de la competitividad de los procedimientos de contratación pública⁸, no se podrán hacer efectivas sobre aquellas causas para las que medie sentencia firme para delitos no económicos, quedando patente de nuevo la preeminencia de los órganos jurisdiccionales sobre la autoridad del poder adjudicador.

Para hacer constar estas medidas de autocorrección, los licitadores disponen de los siguientes medios dirigidos a hacer valer su rectificación respecto de la falta de diligencia que había fomentado la prohibición de contratar primitiva:

- i. Ejecutar el pago de las cantidades adeudadas, y fijadas en sentencia o resolución administrativa sancionadora, con la Agencia Tributaria o con los organismos de la Seguridad Social, o bien adoptar un acuerdo vinculante con sendas instituciones con vistas al pago de dichas cantidades, incluidos los intereses que pudieran mediar.
- ii. Colaborar en el esclarecimiento de los hechos que suscitaron la causa delictiva de prohibición de contratar en la que se ve incurso el operador económico.
- iii. Adoptar medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas.

Dichos medios, deliberados en un procedimiento administrativo contradictorio que se habilita para declarar, si procede, la rehabilitación del operador económico en su derecho de tomar parte de un procedimiento de contratación, posibilitan la efectiva aplicación de las medidas de autocorrección inspiradas en la normativa comunitaria siempre y cuando la acción probatoria del operador económico ofrezca garantías suficientes de que dicho operador contribuya a esclarecer irregularidades pasadas, repare sus consecuencias o prevenga irregularidades futuras.

En este contexto, se hará preceptivo comprobar con posterioridad, cuando se analicen las prohibiciones de contratar en el ordenamiento jurídico español, si el legislador nacional ha adoptado sin pretextos las técnicas destinadas a hacer efectivas las medidas de autocorrección o si, por el contrario, la recepción de estas medidas en la LCSP se ha efectuado integrando alguna variación respecto de los precedentes hasta ahora comentados.

⁸ Reforzando el interés de la Unión Europea de abrir el procedimiento de contratación pública a la competitividad entre los licitadores, tal y como se expresa el TJUE en el apartado 39 de la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Bayerischer Rundfunk y otros, (Asunto C 337-/06)

En cualquier caso, no cabe duda de que las medidas autocorrectoras dibujan un nuevo escenario en la adjudicación de contratos al establecer una regulación más laxa en relación con las prohibiciones de contratar, después de más de 40 años impulsando la restricción de los procesos de adjudicación contractual en pos de la defensa a ultranza de la honradez del sector público, al confiar a los Estados miembros la potestad de facilitar el acceso a dicho procedimiento a los licitadores sobre los que el poder adjudicador de cada Estado haya restaurado su confianza. El pretexto que hace posible este cambio de tendencia encuentra su justificación la intención de la UE de consolidar una cultura empresarial dirigida al cumplimiento de la integridad sin poner en peligro la viabilidad de la competitividad en los procedimientos de adjudicación.

No obstante, existe otro motivo extraoficial que promueve este tipo de iniciativas como es el de hacer valer el principio recaudatorio que se abre a través del procedimiento de contratación pública. Con ello, el sector público ha reparado en la posibilidad de ingresar aquellos pagos que los operadores económicos, que pretenden beneficiarse de los rendimientos que generan este tipo de adjudicaciones contractuales, adeudan los diferentes organismos del sector público.

V. PROHIBICIONES DE CONTRATAR EN EL MARCO NACIONAL

1. Causas de prohibición de contratar en el ordenamiento jurídico español

Las prohibiciones de contratar han sido adoptadas por el ordenamiento jurídico español para operar en el marco de un procedimiento de contratación pública con las entidades que conforman el sector público; procedimiento mediante el cual el órgano adjudicador solicita, entre los entes aspirantes, la prestación de un servicio u obra por parte del elegido adjudicatario para coadyuvar al ente estatal a la consecución de un cometido de utilidad pública.

Así pues, la vulneración de cualquiera de las prohibiciones de contratar en el seno de todo acto de adjudicación de un contrato público, determina la nulidad de pleno derecho de toda entidad que pretenda aspirar a conseguir la licitación del mismo, operando así, junto con la capacidad de obrar y la solvencia, como requisito previo que todo operador económico debe satisfacer para aspirar a convertirse en licitador de cualquier contrato público recogido por la legalidad vigente.

No obstante, y pese a que la LCSP no recoge un concepto de este requisito de contratación pública, en el artículo 71 de la nueva LCSP se articula una lista de

circunstancias que conforman las mencionadas prohibiciones de contratar. Se expondrá a continuación un número de cláusulas de condiciones que recaen e incapacitan al licitador para ser adjudicatario de un contrato público, así como un breve comentario sobre cada una de ellas con el fin de esclarecer la motivación que la LCSP tiene en su regulación. Con el objeto de promover la comprensibilidad de estas causas y la comparabilidad respecto de las esgrimidas en las Directivas anteriormente comentadas, se organizarán los supuestos que conforman las prohibiciones de contratar en diferentes categorías de acuerdo con el pretexto que el legislador esgrime para su legislación, valorando en cada caso particular en qué medida el legislador español se ha ajustado a las directrices comunitarias para su regulación en la Ley nacional.

Por consiguiente las prohibiciones de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la LCSP, son:

1.1. Condena firme por la comisión de un delito

En este primer grupo de prohibiciones reguladas en el artículo 71.1.a) de la LCSP se recoge un listado de delitos⁹, que atentan contra la integridad del poder adjudicador por encontrarse la entidad que aspira a convertirse en adjudicataria condenada por una causa delictiva declarada con firmeza por el órgano judicial correspondiente. De igual forma, también se incluyen en este primer grupo de prohibiciones la condena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

Se hace patente así que la Ley pretende proteger al poder adjudicador de cualquier atentado a su honorabilidad fruto de la potencial vinculación contractual que le asocie a aquel adjudicatario responsable de una hecho delictivo probado, ya sea éste persona física que ocupe el cargo de administrador o representante de aquellas personas jurídicas¹⁰, a las que se extiende la prohibición incluso si se hiciera efectivo su cese de dicha sociedad cuando ésta se encontrara inmersa en el procedimiento de adjudicación.

No obstante, haciendo gala del respeto estricto al principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 CE, no podrá rechazarse la oferta realizada por el licitador si fuere procesado por un delito de los regulados en este precepto cuando no recayera firmeza sobre tal acusación por encontrarse en vía de recurso.

⁹ Al respecto, véase Anexo I para profundizar sobre las figuras delictivas que operan como causas de prohibición de contratar.

¹⁰ Potenciales responsables penales desde la vigencia de la LO 1/2015, de 30 de marzo.

Por su parte, cabe mencionar que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha resaltado en reiteradas ocasiones que ser condenado por sentencia firme opera como causa de prohibición de contratar pero, en ningún caso, como causa de resolución de contrato en vigor¹¹. Así pues se hace inviable resolver el contrato del que es parte el adjudicatario incurso en causa de prohibición de contratar si dicha causa ha sido declarada con posterioridad a la adjudicación del contrato, pero sí permite a la Administración abrir expediente que impida a esta entidad, sobre la que recae dicha prohibición, acceder a futuras adjudicaciones.

Por todo lo expuesto respecto a esta causa concreta, se entiende que el legislador español cumple con el propósito europeo de coartar determinadas conductas delictivas relacionadas con la corrupción, máxime cuando recoge entre las conductas penales a las que se hace referencia en este precepto el delito de financiación ilegal de partidos políticos y el delito contra la Hacienda Pública, que constituyen dos de los pilares sobre la que la Unión Europea pretende hacer bascular las prohibiciones de contratar.

1.2. Sanción firme por la comisión de una infracción administrativa

La segunda categoría de prohibiciones de contratar agrupa las causas recopiladas en los apartados b) y f) del artículo 71.1 de la LCSP, entre las que destacan las siguientes:

- i. Ser sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional o por falseamiento de la competencia, o ser sancionado por infracción muy grave en materia medioambiental, laboral o social¹².
- ii. Ser sancionado con carácter firme por haber incumplido la LGS o por incumplimiento de la LGT.

El motivo que promueve su agrupación de estas prohibiciones de contratar en esta categoría no es otro que la potestad que ostenta la Administración Pública para, de forma análoga a la competencia que recaía sobre el órgano jurisdiccional en la categoría anterior, reconocer la vulneración de requisitos, ya sea en materia fiscal, laboral, social, de subvenciones o tributaria, que imposibilitan la contratación con los licitadores involucrados en ellos. Se reconoce así una autoridad al poder adjudicador, en el ámbito de acción en el que éste es competente, para rechazar la presentación al procedimiento

¹¹ Al respecto véase Anexo II referente al informe 6/1999 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para contrastar que dicha circunstancia no opera como causa de resolución contractual, sino causa de prohibición de contratar.

¹² De acuerdo con la normativa vigente: Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

de contratación pública de aquellos entes que, bajo el prisma del propio órgano, pongan en entredicho la integridad que se presupone a un adjudicatario de un contrato público.

No obstante, el sector público no puede coartar el acceso a un procedimiento de contratación pública a quien incurre en una de las infracciones recogidas en estos preceptos cuando todavía no hayan sido declaradas en firme por la Administración pública en el procedimiento correspondiente o, pese a haber sido declarado por el órgano, cuando no recaiga firmeza sobre la sanción por encontrarse recurrida en vía judicial¹³.

Se contempla, teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, como se refuerza la potestad del poder adjudicador para proteger este procedimiento de contratación pública de los vicios inherentes a los operadores económicos que motiven la falta de credibilidad profesional del operador económico. No obstante, la LCSP no regula las conductas habilitadoras de la prohibición de contratar con la concreción que el legislador europeo pretendía en tanto en cuanto reconoce en la Directiva 2014/24/UE su intención de ampliar el ámbito de reconocimiento de la falta de credibilidad del operador económico a toda clase de acuerdos ilícitos entre operadores a fin de proceder al reparto del mercado, además de los ya mencionados acuerdos entre operadores destinados a falsear la competencia. Dicho lo cual, las consecuencias derivadas de esta circunstancia, vinculada a la intencionalidad de los legisladores, no revisten de especial significación en la aplicabilidad práctica de esta categoría de prohibiciones de contratar por cuanto el órgano adjudicador tiende a interpretar las conductas tipificadas en este precepto de forma amplia como infracciones en materia de defensa de la competencia por imperativo del TJUE¹⁴.

1.3. Falta de solvencia empresarial

En este tercer grupo de causas de prohibición de contratar, mencionadas en el artículo 71.1.c) de la LCSP, se dan cita aquellos supuestos que suscitan dudas al poder adjudicador acerca del cumplimiento ulterior del contrato por quien es adjudicatario del mismo a pesar de no recaer sobre ellos sanción alguna en vía penal o administrativa. El sector público, que pretende en última instancia la consecución de la obra o servicio

¹³ Según lo dispuesto, para los actos de resolución en vía administrativa que da lugar a la prohibición de contratar, en Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso, de 13 de diciembre de 2006, rec. 9272/2003 (ECLI: ES:TS:2006:8644).

¹⁴ Sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2014, Generali-Providencia, Caso Biztosító (C-470/13) EU:C:2014:2469.

para el que saca a concurso un contrato público, decide asegurar su cumplimiento apartando del procedimiento de adjudicación a aquellos operadores económicos de los cuales recela de su solvencia mercantil a la hora de desempeñar las labores para las cuales ha sido contratada por concurrir en ellas las siguientes circunstancias:

- i. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario
- ii. Haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento
- iii. Hallarse declarados en concurso de acreedores
- iv. Estar sujetos a intervención judicial
- v. Haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal

Por tanto, se hace perceptible en la Administración su pretensión de no conceder el contrato público a quien, lejos de remontar una delicada situación económica en la que se encuentra con la concesión del mencionado contrato, no pueda concluir el cometido para el que fue creado.

De gran importancia reviste el carácter del concurso de acreedores declarado puesto que la Ley Concursal, y por ende la LCSP, exclusivamente consideran como causa de prohibición de contratar el concurso voluntario, es decir, aquel concurso declarado por la sociedad que reconoce su propia situación de insolvencia; sin embargo, no opera como tal el concurso necesario declarado por un tercero ajeno a la sociedad insolvente¹⁵. Se impide de esta forma el pernicioso entramado de acusaciones que pudieran tener lugar entre los potenciales adjudicatarios dentro del procedimiento de adjudicación que, en última instancia, dificultara el desarrollo ordinario de tal procedimiento.

Dicho lo cual, cabe mencionar como excepción en este grupo de causas de prohibición lo dispuesto en el artículo 5. Bis de la Ley Concursal introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de esta Ley, por el que no se hace aplicable la causa de contratar a aquella sociedad que comunique al poder adjudicador que ha iniciado negociaciones para su refinanciación y así evitar la exigencia de declarar su concurso voluntario. Sin duda esta circunstancia opera como una medida de autocorrección que el legislador español ha querido incluir en la LCSP para no entorpecer la competitividad en este tipo de procesos de adjudicación de cuya defensa a ultranza es culpable el legislador europeo, como ya se ha visto con anterioridad. Así pues, parece que en esta concreta causa de prohibición de contratar que pone en entredicho la solvencia del

¹⁵ La terminología “concurso voluntario” y “concurso necesario” procede del RDL 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

operador económico, basta con la demostración de la solvencia económica para la ejecución del contrato que se licita para superar la insolvencia transitoria que entorpecía la concurrencia de este operador al proceso de adjudicación contractual.

Diferente es el caso en el que el concurso haya tenido lugar una vez se haya producido la adjudicación del contrato, momento en el cual la administración tiene la potestad de optar, bien por resolver el contrato si el concurso de acreedores se encuentra en la fase de liquidación, o bien por confiar en la diligencia del adjudicatario para la consecución del cometido del contrato si presenta garantías económicas suficientes para ello.

1.4. Falta de cumplimiento de las obligaciones exigidas por la legalidad

Dentro de este grupo de prohibiciones de contratar se han recogido los supuestos regulados en el apartado d) del artículo 71.1 de la LCSP debido a la especial singularidad que a continuación se tratará. Concretamente la redacción del apartado d) de este precepto de la LCSP considera, como causa de prohibición de contratar:

- i. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social
- ii. No cumplir con la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad
- iii. No cumplir con la normativa de igualdad efectiva entre hombre y mujeres¹⁶

Del tenor literal de este precepto reviste de especial singularidad destacar lo que la LCSP entiende por “hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones”. A pesar de que en un primer momento parece que se está refiriendo a que el operador económico debe hallarse al corriente de pago con sendas instituciones, el legislador refuerza su contenido exigiendo también el cumplimiento de las obligaciones de carácter formal en este ámbito. Por ende, el poder adjudicador exige que ambas circunstancias se acrediten por el propio licitador mediante declaración responsable, en el momento de presentar la oferta, para que la administración pueda comprobar con posterioridad en el procedimiento dichas circunstancias, en el caso de que la oferta de dicho licitador sea más ventajosa, sin dilatar en demasía el proceso.

Por su parte, igual contundencia muestra la Administración con quien no se encuentra al corriente con sus obligaciones de cotización y liquidación de sus derechos con la

¹⁶ Concretamente, con lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores.

Seguridad Social al repeler conductas defraudadoras con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por ende, parece aparente el cumplimiento del legislador español de impedir, atendiendo al tenor literal del precepto mencionado, la adjudicación de contratos públicos a todo operador inmerso en algún incumplimiento legal de los mencionados en este apartado, máxime cuando estos contratos suelen financiarse con ingresos fiscales¹⁷.

1.5. Incompatibilidad por conflicto de intereses

Este quinto grupo de prohibiciones de contratar recogidas en los apartados g) y h) del artículo 71.1 de la LCSP encuentran su razón de ser en la concurrencia de intereses personales de los administradores de las entidades licitadoras en el contexto de la contratación pública, que vicien el objeto pretendido por el contrato del que han sido objeto de adjudicación por parte de la Administración Pública.

El poder adjudicador parte de una serie de presunciones objetivas para determinar el conflicto de intereses que se pretende evitar. Se dice que estas presunciones son objetivas en cuanto proceden de un entramado de leyes que regulan la materia de incompatibilidad y entre las que destacan las recogidas en las siguientes normas:

- i. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
- ii. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
- iii. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Cabe advertir que las prohibiciones en las que incurren estas personas físicas o administradores alcanzarán a las personas jurídicas en cuyo capital participen o se encuentren desempeñando sus funciones como personal y altos cargos, así como en los cargos electos al servicio de las mismas, mientras permanezcan al cargo de la sociedad licitadora. También extienden sus efectos las prohibiciones a cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas mencionadas.

¹⁷ Como así se extrae del Asunto del TJUE, *Bâtiments y Ponts Construction*, (C-74/09) en su apartado 50.

De igual manera constituye causa de prohibición de contratar la circunstancia de haber contratado, antes del transcurso de dos años desde su cese, a toda persona por parte de una entidad privada, ahora licitadora, respecto de las que se haya publicado en el BOE la circunstancia de haber prestado sus servicios en las competencias de la Administración General del Estado.

No obstante, cuando la concurrencia de la causa de incompatibilidad que sustente la prohibición de contratar sobrevenga con posterioridad a la perfección del contrato público, la validez del mismo no decae y se continúa con cumplimiento sin alteración alguna, salvo las consecuencias que recaigan sobre la persona física incurso en la propia incompatibilidad, salvaguardando con ello la imparcialidad en la elección del adjudicatario e impidiendo, en última instancia, que se quebrante el principio de competencia tan deseado desde el ámbito comunitario para este tipo de procedimientos.

1.6. Falta de cumplimiento de los requerimientos de la Administración Pública

Como sexta y última categoría, se encuentran los supuestos recogidos en los artículos 71.1.e) y 71.2 de la LCSP que justifican su delimitación como prohibiciones de contratar en el desenvolvimiento negligente del licitador comprobado por el propio sector público en anteriores relaciones inter partes. Es decir, en esta ocasión el poder adjudicador no necesita depositar su confianza en otras jurisdicciones para ser consciente de que el licitador ha operado de forma indolente al disponer información de ello de primera mano. Lo que pretende la Administración con ello es penalizar con la prohibición de contratar a quien en el pasado incurrió en una falta de diligencia en cualquier relación para con ella, dotando de mayor profesionalidad a un procedimiento que reviste de meridiana solemnidad fruto de las exigencias procedentes de la Unión Europea.

Interesante parece en este punto destacar que las circunstancias, que impedirán a los empresarios contratar con las entidades que conforman el sector público, son distintas de acuerdo a si la mala gestión del licitador se ha detectado fuera del proceso de adjudicación contractual o dentro de éste. En este sentido se expresa el legislador de la LCSP en su artículo 71.1.e) un supuesto representativo de la falta de celo del licitador para con las instrucciones del poder adjudicador fuera del procedimiento de adjudicación al incumplir la obligación de comunicar, al órgano administrativo o al registro de licitadores, la variación de cualquier circunstancia requerida para modificar la clasificación de la empresa.

No obstante, el artículo 71.1.e) de la LCSP recoge otros dos supuestos en los que se hace palpable la falta de diligencia del licitador pero, en esta ocasión, dentro del propio procedimiento de contratación:

- i. Incurrir en falsedad en la declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para la adjudicación de contratos por las Administraciones Públicas.
- ii. Incurrir en falsedad de los datos relativos a la solvencia y capacidad del licitador solicitador por el órgano adjudicador.

Así mismo articula el apartado 2 del artículo 71 de la Ley mencionada otros cuatro supuestos que operan como causas de prohibición de contratar dentro de las diferentes fases en las que se desarrolla el procedimiento de contratación en las que se haya producido la falta de diligencia del licitador:

- i. **Fase de adjudicación:** Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar la documentación justificativa de la válida constitución de la sociedad y su no concurrencia en ninguna prohibición de contratar¹⁸ dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
- ii. **Fase de perfeccionamiento del contrato:** Haber dejado de formalizar por causa imputable al adjudicatario el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos cuando dicho acto sea susceptible de recurso especial en materia de contratación o, cuando no sea posible éste recurso, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos¹⁹.
- iii. **Fase de cumplimiento contractual:** Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202 de la LCSP, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y

¹⁸ Circunstancias recogidas en el artículo 150.2 de la LCSP.

¹⁹ Circunstancias previstas en el artículo 153 de la LCSP.

siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

- iv. **Fase de resolución contractual:** Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley²⁰.

De esta forma, cuando se pueda subsumir la casuística de la falta de diligencia en el cumplimiento de un contrato público anterior en cualquiera de los supuestos propios de cada fase de la vida del contrato, el poder adjudicador podrá impedir el acceso a un nuevo procedimiento de adjudicación a quien haya incurrido en cualquiera de estas causas de prohibición.

2. Apreciación de prohibiciones de contratar y efectos desplegados

Tras analizar los supuestos que conforman las prohibiciones de contratar, conviene estudiar la manera en que el órgano de adjudicación contractual aprecia estas incidencias dentro del procedimiento de contratación pública, haciendo especial hincapié en las herramientas de las que dispone el órgano competente, con el beneplácito del legislador español, para dar cuenta de su apreciación, así como de la duración y efectos de estas prohibiciones de contratar sobre las partes involucradas.

No obstante, cabe advertir que la intrincada redacción de la que dota el legislador español a los artículos 72 y 73 de la LCSP en donde se regula las circunstancias objeto de estudio, propician el estudio de las mismas agrupando las diferentes categorías de prohibiciones de contratar hasta el momento analizadas.

Por consiguiente, en primer lugar se estudiarán la competencia y el procedimiento de apreciación, así como los efectos de las prohibiciones de contratar que se funden en sentencia o resolución administrativa firmes, como sucede en las causas de prohibición recogidas en los apartados a), b) y f) del artículo 71.1 de la LCSP; en segundo lugar, se apreciarán estos mismos factores en relación con las causas de prohibición de contratar referidas a la falta de diligencia del licitador tanto fuera del procedimiento de contratación como dentro de dicho procedimiento, reguladas en los cuatro supuestos del artículo 71.2 y en el artículo 71.1.e) de esta misma Ley; y finalmente, con motivo de dotar de cohesión al estudio, se optará por estudiar de forma agrupada estos aspectos

²⁰ Entidades que forman parte del Sector Público.

referentes al resto de prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 71.1 de la LCSP.

2.1. Prohibiciones de contratar fundadas en delitos o infracciones administrativas

Siguiendo esta línea, partimos de las prohibiciones de contratar que basan su exclusión del procedimiento de contratación en la comisión de delitos o infracciones administrativas reconocidas en los apartados a), b) y f) del artículo 71.1 de la LCSP. En este sentido, la propia LCSP reconoce, en el ya mencionado artículo 72, la primacía de los órganos jurisdiccionales y administrativos sobre el propio órgano de contratación pública en la potestad de apreciación de la duración y alcance de dichas prohibiciones sobre el licitador que incurre en ellas. Esta primacía a la que se hace referencia se funda en dos motivos:

- i. Porque la competencia en la apreciación de estas causas de prohibición de contratar, cuando recae directamente sobre el órgano de contratación, debe basarse su decisión en la sentencia o resolución administrativa procedente de los órganos anteriormente mencionados.
- ii. Porque debe abstenerse el poder adjudicador de fijar la duración en la que el licitador queda excluido de cualquier procedimiento de contratación en el sector público cuando la sentencia o la resolución administrativa se pronuncien en estos términos.

Se demuestra, por tanto, como aunque el órgano de contratación concentra su competencia en la apreciación de estas prohibiciones de contratar, queda sujeto a la duración y alcance de la prohibición de contratar prevista en la sentencia o resolución administrativa cuando el órgano judicial o administrativo se pronuncie con firmeza sobre estos términos. Los efectos de la declaración de la prohibición de contratar del operador económico siguiendo estas condiciones serán desplegados sobre éste desde la firmeza de la sentencia o resolución administrativa que valore el delito o infracción, respectivamente, en que se funde la causa de prohibición y por el plazo en que considere oportuno el órgano competente; circunstancia que le impedirá contratar con cualquier órgano del sector público nacional por dicho periodo de tiempo, a menos que la prohibición de contratar se funde en virtud de la LGS, que prohibirá al operador económico contratar exclusivamente con todo órgano que ostente la condición de Administración Pública, o en virtud de la LGT, que afectará exclusivamente a toda

relación contractual entablada por el licitador afectado con la Administración Pública del ámbito del órgano administrativo que impuso dicha sanción, quedando a salvo de tal prohibición toda relación contractual fuera de este ámbito de actuación²¹.

No obstante, para aquellos casos en los que la sentencia o resolución administrativa no hayan valorado los extremos con que se aplicará la prohibición de contratar, el párrafo segundo del artículo 72.2 obliga a la instrucción de un procedimiento ad hoc en vía administrativa para determinar el alcance y la duración con la que opera la prohibición de contratar para cada caso concreto.

Así pues, del tenor literal del artículo 72.3 LCSP se extrae que la competencia para fijar la duración y el alcance de estas concretas prohibiciones de contratar recae sobre el Ministro de Hacienda y Función Pública, coadyuvado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado al instruir el procedimiento y elevar propuesta previa que se traslada al Ministro. El legislador, en pos de dotar al Ministro de Hacienda y Función Pública de la información coyuntural en la que transcurre la fundamentación del delito o infracción administrativa en la que se sustenta la prohibición de contratar, añade en el segundo párrafo de este apartado, la exigencia que recae sobre el órgano judicial o administrativo de remitir a la Junta Consultiva el testimonio recogido en sentencia o resolución. Así se refuerza el rigor con el que esta institución determina la duración de la prohibición de contratar, que opera sobre el licitador, y le permite desplegar los efectos de dicha prohibición sobre el mismo desde la inscripción de la resolución en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público por un plazo de cinco años como máximo, desde la fecha de la condena por sentencia, o de tres años desde la firmeza de la sanción interpuesta por resolución administrativa²².

2.2. Prohibiciones de contratar fundadas en la falta de diligencia del operador económico con la Administración Pública

Una vez se han observado las particularidades en la apreciación de estos dos primeros grupos de prohibiciones de contratar, se prosigue por analizar las prohibiciones recogidas en el apartado e) del artículo 71.1 de la LCSP y el artículo 71.2 de esta misma Ley.

²¹ Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas son ejemplos de entes que conforman el sector público diferentes a las Administraciones Públicas

²² Como así lo determina el artículo 72.6 de la LCSP.

A pesar de que los artículos 72 y 73 de la LCSP tienden a regular estos factores junto con las causas de prohibición anteriormente analizadas, por presentar ciertas similitudes procedimentales con estas, las singularidades de las causas de prohibición de contratar referidas a la falta de diligencia en el procedimiento de contratación reguladas en estos artículos motivan un análisis particularizado de las mismas.

Por consiguiente, el artículo 72.3 de la LCSP articula dos procedimientos competenciales de apreciación diferentes de acuerdo con el trasfondo causal en el que se basa la falta de diligencia procedimental del licitador.

Por un lado, la LCSP reconoce la competencia al Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de los órganos consultivos de las CCAA, para instruir un procedimiento de declaración de la prohibición de contratar, cuando dicha prohibición se funde en el incumplimiento de la obligación del licitador de comunicar, al órgano administrativo o al registro de licitadores, la variación de cualquier circunstancia tenida en cuenta en la clasificación de la empresa fuera del procedimiento de contratación pública²³. En este caso, los órganos de contratación de las CCAA promoverán el registro de la resolución donde se especifique la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores de las Comunidad Autónoma pertinente, desplegando los efectos de la prohibición de contratar del licitador, durante un plazo máximo de 3 años desde la inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma pertinente, exclusivamente con el sector público concerniente a la Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales integradas en el ámbito territorial de la misma.

No obstante, cuando falta de diligencia del licitador para con la clasificación de empresa se haya demostrado en el ámbito estatal, el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa consulta en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, promoverá la inscripción de la resolución que funde la prohibición de contratar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; prohibición que desplegará los mismos efectos sobre todo el sector público español.

²³ Prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 71.1.e) LCSP en referencia a los artículos 82.4 y 343.1 de esta misma Ley.

Por otro lado, cuando la causa de la prohibición de contratar se funde en:

- i. Falsedad de la declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para la adjudicación de los contratos por las Administraciones Públicas²⁴
- ii. Falsedad de los datos relativos a la solvencia y capacidad del licitador que son facilitados al órgano adjudicador²⁵
- iii. Falta de diligencia del empresario en el procedimiento de contratación pública²⁶

La declaración de la prohibición de contratar corresponderá directamente al órgano de contratación en el seno de un procedimiento instruido a tal efecto, sin necesidad de que ningún otro órgano intervenga en él, desplegando sus efectos desde su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, momento desde el que el operador económico afectado por la prohibición se verá impedido, durante el plazo máximo de tres años, para contratar únicamente con el órgano de contratación que declaró la prohibición, a menos que el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, proponga la extensión de dicha prohibición de contratar a todo el sector público.

2.3. Prohibiciones de contratar fundadas en causas diversas

Teniendo en cuenta lo recogido hasta el momento, en última instancia se procederá a analizar conjuntamente la competencia en la apreciación y los efectos de la misma concerniente a toda prohibición de contratar contenida en las letras c), d), g) y h) del apartado 1 del artículo 71.1 de la LCSP.

La ley decide regular la apreciación de estas circunstancias de forma agrupada, a pesar de su palpable disparidad, precisamente porque no encajan en las singularidades procedimentales descritas para las prohibiciones anteriores. Así pues, del artículo 72.1 de esta Ley se desprende la diferencia primordial con respecto a las causas de prohibición anteriormente estudiadas en tanto en cuanto es el propio órgano de contratación quien declara directamente la prohibición de contratar, desplegando los efectos derivados de la misma desde el mismo momento en que se aprecia hasta el momento en que deje de subsistir la situación causante de la prohibición, sin necesidad de que medie la inscripción en el Registro oportuno para tal efecto; quedando el

²⁴ Prohibición de contratar recogida en el artículo 140 de la LCSP.

²⁵ Prohibiciones de contratar recogidas en los artículos 74 y 84 de la LCSP respectivamente.

²⁶ Prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 71.2 de la LCSP.

operador económico se impedido para contratar no solo con el órgano de contratación que declaró la prohibición, sino con todo el sector público.

En cualquier caso, para promover su comprensibilidad de las situaciones recogidas en el presente epígrafe, se dispone del ANEXO III para conocer con mayor claridad las vicisitudes procedimentales analizadas hasta el momento.

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUTOCORRECCIÓN EN ESPAÑA

Como se ha mencionado con anterioridad, las medidas de autocorrección incorporadas a la normativa que regula la contratación con el sector público por iniciativa europea, pretenden su aplicación en este tipo de procedimientos para excepcionar la exclusión de un licitador incurso en una prohibición de contratar cuando éste muestre garantías suficientes para la corrección de un comportamiento inadecuado, que fundaba la prohibición de contratar, e impedir efectivamente, de esta manera, que este comportamiento se repita en el futuro.

Teniendo en cuenta lo dispuesto, el presente apartado pretende analizar los diferentes medios de prueba de los que el legislador español ha proveído al operador económico incurso en una prohibición de contratar para hacer efectiva la medida de autocorrección, que lo habilite para concurrir en un procedimiento de contratación pública, y valorar en qué medida la LCSP aboga por posibilitar el objetivo europeo de dotar de mayor competitividad a este tipo de procedimientos con la inclusión en dicha norma de las medidas de autocorrección.

De la lectura de la LCSP se observa como el legislador español ha traspuesto los medios de rectificación de las situaciones que constituyen prohibiciones de contratar de una forma incompleta y poco clarificadora, tal y como se observa de la redacción del artículo 72.5 de la LCSP²⁷, de la que se extraen fundamentalmente dos medidas autocorrectoras:

²⁷ «No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incurso en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a).»

- i. Acreditar el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de la que derive causa de prohibición de contratar.
- ii. Adoptar medidas técnicas, organizativas y de personal que viten la comisión de futuras infracciones administrativas.

De la comparación de estas medidas autocorrectoras, adoptadas por el ordenamiento jurídico español, con las medidas reproducidas en las Directivas de influencia europea, a las que se ha hecho mención con antelación, se puede extraer la consideración de que, la labor de trasposición de las medidas de autocorrección por parte del legislador español denota una falta de rigor y detalle que ha propiciado la nula regulación, como medida de autocorrección, de uno de los tres pilares en esta materia como es la colaboración del operador económico incurso en una prohibición de contratar con las autoridades para esclarecer los hechos y circunstancias que la propiciaron. Además la LCSP no hace mención alguna al procedimiento contradictorio que debe instruir la Administración Pública para valorar si el operador económico que ha adoptado alguna de las medidas de autocorrección, que la LCSP propugna para su restitución como participe en el procedimiento de contratación pública, cumple con las garantías suficientes para corregir el comportamiento que propició la prohibición de contratar.

Estas dos circunstancias, inherentes a la actividad trasponedora del legislador español de la LCSP, han propiciado que las medidas de autocorrección, que si bien coadyuvan a la consecución del objetivo comunitario de promoción de la competitividad en los procedimientos de contratación pública sin comprometer la integridad del poder adjudicador que toma parte en ellos, hayan visto mermado su ámbito objetivo de aplicación en España, lo que en última instancia hace más restrictivo el procedimiento de declaración de las prohibiciones de contratar en este Estado.

VII. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el análisis efectuado acerca de las prohibiciones de contratar y la regulación que de ellas se hace en la LCSP, se extraen las siguientes conclusiones:

1. La nueva perspectiva de la que se dota a la contratación pública desde los organismos legisladores europeos, a través de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, ha fortalecido los mecanismos de protección del sector público al esclarecer las circunstancias que suponen prohibiciones de contratar para los operadores económicos que pretenden tomar parte en los procedimientos de contratación pública. En esta línea, la actividad trasponedora que ha llevado a cabo el legislador español ha respetado notablemente esta tendencia europea, dotando al poder adjudicador de unos mecanismos útiles con los que salvaguardar el procedimiento de contratación pública de la injerencia de corrupción política y administrativa o de cualquier atentado contra la integridad de los poderes adjudicadores que toman parte en estos procedimientos.
2. La regulación de las causas de prohibición de contratar en la nueva LCSP es, en relación con la apreciación y efectos derivados de las mismas, confusa por cuanto presenta una redacción enrevesada y en la que se le da un exiguo tratamiento particular a cada una de ellas, lo que dificulta la comprensión de estos extremos por parte del lector de la LCSP en relación con esta materia.
3. El legislador español no ha asumido con total literalidad las medidas de autocorrección propuestas por las Directivas europeas mencionadas, dejando incluso de contemplar alguna de las acciones de las que dispone el operador económico para restituir su participación en el procedimiento de adjudicación contractual, comprometiendo parcialmente el objetivo marcado por los organismos europeos de promover la competitividad en este tipo de procedimientos contractuales.

En todo caso, atendiendo a las conclusiones expuestas, la nueva LCSP articula un conglomerado de prohibiciones de contratar plenamente operativas en los procedimientos de contratación con el sector público que, lejos de obstruir este tipo de procedimientos de adjudicación de contratos públicos, ayudan a preservar la competitividad entre licitadores exenta de toda circunstancia que pervierta la finalidad última de este tipo de procedimientos.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- **Trabajos doctrinales**

Razquin Lizarraga, M.M^a. –*Contratos públicos y Derecho Comunitario*. Aranzadi, Pamplona, 1996, p.40 y ss.

Gimeno Feliú, J.M^a. *El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del sector público: luces y sombras*. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 176, 2008, pp. 9 a 53.

Bermejo Vera, J. *Las prohibiciones de contratar en la Ley de Contratos del Sector Público*. Revista Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 2008.

Gimeno Feliú, J.M^a. *Hacia una Nueva Ley de Contratos del sector público ¿Una nueva oportunidad perdida?* Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 182, 2017, pp. 181 a 221.

Huergo Lora, A. *La prohibición de contratar con el sector público por falseamiento de la competencia*. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 182, 2017, pp. 223 a 259.

Vilches García, F. *La morosidad en la contratación pública*. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 186, 2017, pp. 321 a 342.

Valeije Álvarez, I. *La prohibición de contratar con el sector público y otras consideraciones accesorias*. Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXVIII, núm. extra 38, 2018, pp.479-545.

Medina Arnaiz, T. *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*. Aranzadi, Pamplona, Primera edición, 2018, p.729 a 798.

- **Informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Estado**

Informe 25/09, 1 de febrero de 2010. *Extensión de la prohibición de contratar declarada a una empresa a las restantes que integran un grupo*. Sitio web:

<http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2010/Informe%2025-09.pdf>

Informe 37/09, 1 de febrero de 2010. *Aplicación a las sociedades en que participen los concejales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local de las prohibiciones para contratar previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado*. Sitio web:

<http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2010/Informe%2037-09.pdf>

Informe 18/11, 1 de marzo de 2012. *Aplicación de la prohibición de contratar en los procedimientos de adjudicación de los contratos relativos a servicios financieros*. Sitio web:

<http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202012/Informe%2018%20-2011%20jcca.pdf>

Informe 50/11, 1 de marzo de 2012. *Apreciación de causa de prohibición de contratar*. Sitio web:

<http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202012/Informe%2050%20-2011%20jcca.pdf>

Informe 19/14, 21 de marzo de 2014. *Solicitud extensión de efectos de prohibición de contratar*. Sitio web:

<http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202014/informe%20internet%2019%2014.pdf>

- **Legislación**

Constitución Española. Publicado en «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Publicado en «BOE» núm. 281, de 24/11/1995.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Publicado en «BOE» núm. 257, de 26/10/2001.

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Publicado en «BOE» núm. 164, de 10/07/2003.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Publicado en «BOE» núm. 276, de 18/11/2003.

Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria. Publicada en «BOE» núm. 302, de 18/12/2003.

Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 114 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Publicado en «BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2011.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Publicado en «BOE» núm. 272, de 09/11/2017.

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra, de suministro y servicios. Publicado en «DOUE» núm. 134, de 30 de abril de 2004.

Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Publicado en «DOUE» núm. 94, de 28 de marzo de 2014.

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Publicado en «DOUE» núm. 94, de 28 de marzo de 2014.

- **Jurisprudencia**

Sentencia de la Audiencia Nacional, sec. 1ª, de 27 de febrero de 2019, rec. 79/2019 (ECLI: ES:APBU:2019:110A)

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid (Sala de lo contencioso), sec. 1ª, de 26 de febrero de 2019, rec. 253/2018 (ECLI: ES:TSJCL:2019:751)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 20 de diciembre de 2017, asunto C-178/16 (ECLI:EU:C:2017:1000)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 22 de octubre de 2015, asunto C-552/13 (ECLI:EU:C:2015:713)

IX. ANEXO I

Figuras delictivas del artículo 71.1.a)	
Este tipo de prohibiciones de contratar operan cuando el licitador ha sido declarado culpable, mediante sentencia firme, de la comisión de alguno de los siguientes delitos:	
Precepto	Delito
Artículo 573 y ss. CP	Terrorismo
Artículos 571 y ss. CP	Constitución o integración de una organización o grupo criminal
Artículo 510 y ss. CP	Asociación ilícita
Artículo 304 bis y ss. CP	Financiación ilegal de los partidos políticos
Artículo 177 bis y ss. CP	Trata de seres humanos
Artículo 286 bis y ss. CP	Corrupción en los negocios
Artículo 428 y ss. CP	Tráfico de influencias
Artículo 419 y ss. CP	Cohecho
Artículo 436 y ss. CP	Fraude
Artículo 305 y ss. CP	Delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Artículo 311 y ss. CP	Delitos contra los derechos de los trabajadores
Artículo 446 y ss. CP	Prevaricación
Artículo 432 y ss. CP	Malversación
Artículo 439 y ss. CP	Negociaciones prohibidas a los funcionarios
Artículo 298 y ss. CP	Blanqueo de capitales
Artículo 319 y ss. CP	Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo
Artículo 321 y ss. CP	Delitos sobre patrimonio histórico
Artículo 325 y ss. CP	Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

X. ANEXO II

Informe 6/99, de 17 de marzo de 1999. "Posible instrucción de expediente de prohibición de contratar por condena por sentencia firme por delito de falsedad".

ANTECEDENTES

1. Por el Alcalde del Ayuntamiento de Bayona (Pontevedra) se dirige escrito a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, al que adjunta otro suscrito por arquitecto contratado por el Ayuntamiento a efectos de que se informe de las actuaciones que proceda llevar a cabo o si debe mantenerse la contratación de los servicios del arquitecto.

Después de realizar diversas consideraciones sobre el artículo 20 y de la disposición transitoria de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 11 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, llega a la conclusión de no ser aplicable el artículo 20 de la citada Ley por tratarse de una contratación realizada con anterioridad a su entrada en vigor y, en último caso, por referirse a contratación a realizar y no realizada, por tener que tomar en cuenta las circunstancias del artículo 13.4 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, y porque la sentencia no contiene pronunciamiento alguno sobre la prohibición de contratar, termina suplicando que no se derive actuación alguna contra el dicente que afecte a su relación contractual con el Ayuntamiento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

(...)

2. La primera consideración que hay que realizar es que tanto la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como la anterior Ley de Contratos del Estado configuran la condena por sentencia firme por delito de falsedad como causa de prohibición de contratar (artículo 20 a) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 9.1 de la Ley de Contratos del Estado) y no como causa de resolución del contrato, por lo que resulta ocioso plantearse si resulta aplicable la legislación anterior o la vigente, aunque en este punto esta Junta Consultiva tiene que mostrar su extrañeza ante los datos que se manifiestan en el escrito del Ayuntamiento sobre la duración del contrato, dado que la legislación anterior no permitía que este tipo de contratos se celebrasen por plazo superior al año, sin perjuicio de posibles prórrogas

(artículo 5 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril). En consecuencia debe mantenerse que en contratos adjudicados y en vigor, la sentencia condenatoria por delitos de falsedad no puede operar como causa de resolución, sino como causa de prohibición de contratar para futuras adjudicaciones.

3. La segunda consideración se refiere al procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar y, en este punto, insistiendo que la prohibición de contratar afectará, su caso, a futuros contratos, hay que limitarse a reproducir las normas que a este respecto se contienen en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

Según el artículo 21.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la prohibición de contratar por condena firme por delito de falsedad se apreciará de forma automática por los órganos de contratación, si bien para determinar su alcance será necesario instruir expediente para la declaración de la prohibición, correspondiendo la competencia para su resolución al Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a cuyo efecto, según señala el artículo 13.1 del Real Decreto 390/1996, corresponde a los órganos de contratación la iniciación del procedimiento, incorporándose al mismo (artículo 13.2) los informes de los servicios técnicos y jurídicos, cumpliéndose el trámite de audiencia remitiéndose el expediente a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

En definitiva es el propio Ayuntamiento el que debe decidir si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se debe iniciar o no expediente para la declaración de la prohibición de contratar y, caso afirmativo, incorporar los informes jurídicos y técnicos pertinentes y remitir lo actuado a esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sin que la misma pueda sustraer al Ayuntamiento sus competencias específicas, claramente deslindadas en los preceptos reseñados, entre otras razones y como fundamental por la prescripción del artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, expresivo de que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.

XI. ANEXO III

Prohibición de contratar a consecuencia de la comisión de un delito o infracción administrativa declarada en sentencia o resolución sancionadora firmes.

- Casos en los que la sentencia o la resolución administrativa se pronuncian sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar.

Artículo de la LCSP	Prohibición de contratar	Competencia de apreciación	Inicio del procedimiento de declaración	Duración de la prohibición
71.1.a)	Ser condenado por sentencia firme por la comisión de un delito de los recogidos en este artículo	Órgano jurisdiccional o administrativo	Antes de la prescripción de la pena prevista para el delito concreto	Por el tiempo que fije la sentencia
71.1.b)	Ser sancionado por resolución administrativa firme por la comisión de una infracción en las materias reguladas		Antes de 3 años a partir de que la resolución sancionadora adquiera firmeza	Por el tiempo que fije la resolución administrativa

- Casos en los que la sentencia o la resolución administrativa no se pronuncian sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar.

Artículo de la LCSP	Prohibición de contratar	Competencia de apreciación	Inicio del procedimiento	Duración de la prohibición
71.1.a)	Ser condenado por sentencia firme por la comisión de un delito de los recogidos en este artículo	Ministro de Hacienda y Función Pública	Antes de la prescripción de la pena prevista para el delito concreto	Por un tiempo no superior a 5 años desde la condena por sentencia firme.
71.1.b)	Ser sancionado por resolución administrativa firme por la comisión de una infracción en las materias reguladas	y Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado	Antes de que transcurran 3 años a partir de que la resolución sancionadora adquiera firmeza	Por un tiempo no superior a 3 años desde la firmeza de la resolución sancionadora

Prohibición de contratar asociada a diferentes situaciones de hecho entre el licitador y el sector público.

Artículo de la LCSP	Prohibición de contratar	Competencia de apreciación	Inicio del procedimiento	Duración de la prohibición
71.1.c)	Haber sido declarada la falta de solvencia empresarial del licitador	Directamente por el Órgano de contratación	No hay procedimiento en vía administrativa.	Mientras concurren las circunstancias que en cada caso determinen la concurrencia de la prohibición de contratar
71.1.d)	Falta de cumplimiento tributario o de Seguridad Social			
71.1.f)				
71.1.g)	Incompatibilidad del licitador para cumplir con el cometido del contrato público por conflicto de intereses			
71.1.h)				

Prohibición de contratar derivada de la falta de diligencia del licitador fuera del procedimiento de contratación pública.

Artículo de la LCSP	Prohibición de contratar	Competencia de apreciación	Inicio del procedimiento	Duración de la prohibición
71.1.e)	Incumplimiento de la obligación del licitador de comunicar, al órgano adjudicador o al registro de licitadores, la variación de cualquier circunstancia tenida en cuenta en la clasificación de la empresa	Ministro de Hacienda y Función Pública y Órganos competentes de la CCAA	Antes de que transcurran 3 años desde la fecha en que procediera la comunicación de los datos requeridos	Por un tiempo no superior a 3 años desde que se reconozca la prohibición

Prohibición de contratar derivada de la falta de diligencia del licitador en el seno del procedimiento de contratación pública.

Artículo de la LCSP	Prohibición de contratar	Competencia de apreciación	Inicio del procedimiento	Duración de la prohibición
71.1.e)	Falsedad de la declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para la adjudicación de los contratos por las Administraciones Públicas	Órgano de contratación pública	Antes de que transcurran 3 años desde la fecha en que se hubiera producido la comunicación de los datos falsos	Por un tiempo no superior a 3 años desde que se reconozca la prohibición
	Falsedad de los datos relativos a la solvencia y capacidad del licitador que son facilitados al órgano adjudicador			
71.2	Falta de diligencia del empresario en el procedimiento de contratación pública		Antes de que transcurran 3 meses desde la adjudicación del contrato o 3 años desde la resolución o incumplimiento del contrato	Por un tiempo no superior a 3 años desde que se reconozca la prohibición